

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A.C.



LOS DETERMINANTES SOCIOECONÓMICOS DE LA VIOLENCIA EN MÉXICO
2010 – 2015

TESINA

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE
MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

PRESENTA

OSCAR EDER OLIVA RAMÍREZ

DIRECTORA DE TESINA

DRA. CLAUDIA MALDONADO TRUJILLO

CIUDAD DE MÉXICO

2020

Agradezco al CIDE por la oportunidad de pertenecer a su comunidad, por las múltiples enseñanzas a nivel académico y personal. Gracias a la Dra. Claudia Maldonado, por su apoyo y orientación. A todos mis profesores y compañeros por compartir tanto.

Especialmente agradezco a mi familia, mis papás y hermanos; sin ellos esto no hubiera sido posible.

Índice

Introducción	1
I. ¿Por qué importa la desigualdad?	3
1.1. Consecuencias de la desigualdad.	6
II. Desigualdad y violencia	9
2.1. Violencias estructurales.	9
2.2. Caracterización de la desigualdad en México.	12
2.3. Violencia directa en México.	15
2.4. La cohesión social.	18
III. Metodología	28
3.1. Datos.	28
3.2. Estrategia empírica.	33
IV. Hallazgos e implicaciones de política pública	37
V. Conclusiones	39
Bibliografía.....	40
Anexos.....	44

Índice de figuras

Figura 1. Tipos de violencias.....	14
Figura 2. Indicadores de cohesión social.....	28

Índice de gráficas

Gráfica 1. Coeficiente de Gini 1992 – 2018.....	16
Gráfica 2. Evolución de la pobreza en México 2008 – 2018.....	17
Gráfica 3. Ingreso por deciles.....	18
Gráfica 4. Evolución de la pobreza extrema en México 2008 – 2018.....	19
Gráfica 5. Homicidios en México 1990 – 2018.....	20
Gráfica 6. Tasa de homicidios 2010 – 2015.....	35
Gráfica 7. Coeficiente de Gini 2010 – 2015.....	36

Índice de tablas

Tabla 1. Estadística descriptiva.....	47
Tabla 2. Estimadores OLS para datos 2010.....	48
Tabla 3. Estimadores OLS para datos 2015.....	49
Tabla 4. Estimadores OLS para datos 2010 con efectos de interacción.....	50
Tabla 5. Estimadores OLS para datos 2015 con efectos de interacción.....	51
Tabla 6. Estimadores 2SLS con variable instrumental.....	52
Tabla 7. Estimadores 2SLS con variable instrumental y variables de control.....	53

Siglas y acrónimos.

COLMEX	El Colegio de México
CEPAL	Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CONEVAL	Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
ENVIPE	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública
INEGI	Instituto Nacional de Estadística y Geografía
IRS	Índice de Rezago Social
MCS-ENIGH	Modulo de Condiciones Socioeconómicas de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
PPD-CIDE	Programa de Política de Drogas del CIDE
SEDENA	Secretaría de la Defensa Nacional
SEDLAC	Socio-Economic Database of Latin America and the Caribbean
SWIID	Standardized World Income Inequality Database

Introducción

Con la implementación de la Estrategia General de Combate al Narcotráfico y la Delincuencia Organizada en 2007, México vive una situación de delincuencia y crímenes violentos a gran escala, donde las víctimas se cuentan por miles. Esta situación no ha podido ser atendida y, en gran medida, tampoco han podido ser explicados sus orígenes más profundos. Existe evidencia de que a partir de la implementación de esta estrategia de combate al narcotráfico el número de homicidios se ha exacerbado, sin embargo, también existen factores estructurales que no han sido tomados en cuenta en el debate de políticas públicas, como la desigualdad y la pobreza.

La investigación tiene la intención de contribuir a la identificación de los factores estructurales que permitan tener una comprensión más amplia del fenómeno de la violencia y explicar si existen factores de desigualdad que impacten en el comportamiento de la violencia, la investigación busca responder la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre desigualdad y violencia en el contexto mexicano (2010 y 2015)?

Para contestar a esta pregunta parto, en una primera sección, de determinar cuál es la importancia de la desigualdad y cómo a pesar de que existe un progreso económico en el mundo, este no se ha traducido en la reducción de las desigualdades, sino en la concentración de la riqueza y cuáles son las implicaciones y consecuencias de tener sociedades con grandes niveles de desigualdad.

La segunda sección es sobre las bases teóricas de la violencia estructural y la cohesión social, la primera explica a diversos tipos de violencia, visibles e invisibles, que se nutren y retroalimentan entre sí, generando un círculo vicioso de violencias; el tema de la cohesión social refiere a un atributo de las sociedades que comparten valores igualitarios y que desarrollan estrategias, políticas e instituciones encaminadas a la reducción de las desigualdades, la exclusión, pobreza y discriminación.

La tercera sección responde a la pregunta de investigación desde una perspectiva empírica. En principio, tratar de explicar la violencia a partir de la desigualdad puede tener un problema de endogeneidad, ya que tanto la desigualdad puede estar generando violencia como la violencia

genera desigualdad. Para mitigar este problema de endogeneidad, utilizo el método de variable instrumental (2SLS) a manera de encontrar una variable exógena que ayude a explicar la desigualdad, sin que necesariamente esté relacionada con la violencia, esta variable es el Índice de Rezago Social.

El argumento principal de la investigación es que el estallamiento de la violencia en México se da en un contexto social específico de pobreza y desigualdad, donde las estructuras económicas y sociales han permitido el escalamiento del problema de inseguridad y violencia, misma que se ha focalizado entre grupos vulnerables, principalmente en los jóvenes. La debilidad institucional, la corrupción, las fallas en el sistema judicial, la pobreza y la desigualdad limitan las posibilidades de desarrollo de las personas, y constituyen causas estructurales que han abonado a exacerbar la violencia.

I. ¿Por qué importa la desigualdad?

La pobreza y las desigualdades económicas y sociales tienen un impacto directo en la vida de las personas, en su desempeño y en su participación en la sociedad, de manera que pueden determinar la forma en que éstas se integran a una comunidad. De acuerdo con el estudio de desigualdades en México, de El Colegio de México (COLMEX, 2018) la pobreza es definida como carencia de recursos y acceso a oportunidades, que excluyen a individuos y grupos de los niveles mínimos deseables de bienestar; mientras que la desigualdad analiza la distribución de oportunidades y resultados entre los miembros de una comunidad.

La desigualdad es importante porque a pesar de que en años recientes muchas sociedades, incluida la mexicana, han experimentado un progreso económico y material, esto no se ha traducido en una redistribución equitativa de la riqueza; por el contrario, el progreso económico ha beneficiado solo a unos cuantos dejando a grandes porciones de la población en condiciones desfavorables. Entre 1995 y 2016, la pobreza a nivel mundial disminuyó (Oxfam 2018). Sin embargo, el modelo económico actual prioriza la acumulación de riqueza a costa del bien comunitario, lo que ha permitido mantener las condiciones de desigualdad e incluso acentuarlas. En este sentido, la desigualdad tiene que ver con la falta de oportunidades y el logro de resultados para vivir con dignidad, más allá de la falta de recursos económicos que implica la pobreza.

La pobreza y la desigualdad son conceptos asociados, pero que no reflejan el mismo fenómeno. Más allá de la medición de los niveles de pobreza, el estudio de la desigualdad permite entender las consecuencias de la concentración de la riqueza y las brechas en el acceso a recursos y oportunidades. Enfocarse en la desigualdad en lugar de la pobreza permite comprender que más allá de cumplir con estándares materiales y de crecimiento económico, es necesario repensar el bienestar social, pues la calidad de vida no depende absolutamente del nivel de ingresos.

Para entender el concepto de desigualdad, la investigación parte de dos perspectivas: desigualdad de oportunidades, que refiere a igualar las condiciones desde las cuales los individuos pueden desarrollar su potencial; y la desigualdad de resultados, donde la idea es que hay diferencias en los resultados asociados a los mismos niveles de esfuerzo (Atkinson, 2015). La desigualdad de oportunidades refiere a las condiciones previas o iniciales y busca igualar el

terreno, en otras palabras, si es vista como una carrera, la igualdad de oportunidades busca que todos los competidores partan del mismo punto. La desigualdad de resultados refiere a las interacciones entre los individuos y el contexto, utilizando la misma analogía de la carrera, la igualdad de resultado prioriza que todos los competidores tengan las condiciones para llegar a la meta.

La desigualdad de oportunidades es un concepto *ex ante*, mientras que la desigualdad de resultados es *ex post*. Quienes privilegian la igualdad de oportunidades y piensan que la de resultados es irrelevante, consideran que cuando queda establecida la igualdad de condiciones iniciales, ya no es necesario indagar en los resultados. Atkinson (2015) explica que esto es erróneo por tres razones: primero, porque el esfuerzo individual existe, pero también la mala suerte y las circunstancias adversas y no es posible ignorar aquellos a quienes se priva de resultados; segundo, hay que distinguir entre igualdad no competitiva, donde todos tienen la misma oportunidad de satisfacer sus necesidades, e igualdad competitiva, donde existe la misma oportunidad de participar en una carrera que tiene premios desiguales; y tercero, la desigualdad de resultados afecta directamente a la desigualdad de oportunidades, los resultados *ex post* de hoy afectan a las condiciones iniciales de mañana.

En ambos casos la desigualdad puede ser explicada por una combinación de elementos y no desde una sola causa, destacan las condiciones iniciales de cada persona, el esfuerzo individual, las condiciones sociales, factores sociales o la acción pública; sin embargo, también intervienen factores externos o aleatorios, como desastres naturales, contingencias o acontecimientos inesperados. Entender las desigualdades importa porque la falta de oportunidades y el creciente estancamiento en la movilidad social se ha visto exacerbado a medida que la distribución de la riqueza se ha hecho más desigual.

El estudio de las desigualdades permite analizar los niveles de exclusión que sufren personas y grupos sistemáticamente excluidos y cómo estas desventajas se retroalimentan. Desde una perspectiva de interseccionalidad pueden analizarse las diferentes dimensiones transversales a las que se enfrentan, éstas se perpetúan y reproducen de manera que las personas menos favorecidas son al mismo tiempo las más vulnerables, y al mismo tiempo. En sociedades que enfrentan situaciones de guerra civil, por ejemplo, los sectores excluidos y más vulnerables son, al mismo tiempo, los sectores que más enfrentan y son víctimas de la violencia.

Existen al menos cuatro categorías para el estudio de las desigualdades, ya sea para identificar sus causas y consecuencias, en qué grado es deseable, los vínculos que tiene con la pobreza o para tratar de visibilizar las causas estructurales que la impulsan (Anderson, 2015).

Desde el punto de vista económico, la desigualdad importa porque afecta el crecimiento económico, que es el cimiento del progreso social. Desde esta perspectiva, la meta consiste en eliminar la pobreza e impulsar al crecimiento económico, generalmente medido como Producto Interno Bruto por cápita. Esta perspectiva sostiene que los bajos ingresos minan la demanda de los consumidores, que es necesaria para impulsar los mercados.

Una de las principales críticas a esta visión es la medición de la desigualdad a partir de la distribución del ingreso, ya que estas medidas, generalmente dicen poco sobre el acceso a salud, agua potable, educación o medio ambiente; medidas que son necesarias para el desarrollo.

Otro enfoque de la desigualdad es el del desarrollo humano, que amplía la visión de desarrollo económico para incluir una noción de habilidades y capacidades humanas. Más allá de una medición del ingreso, la visión de desarrollo humano postula que aquellas personas que tienen problemas de salud, mantienen trabajos precarios, muchos hijos o que mantienen bajos niveles educativos, son las personas que se mantienen más vulnerables.

Sin embargo, esta perspectiva continúa siendo individualista, pues no considera el papel de las instituciones públicas que garanticen, por ejemplo, el acceso a la justicia o a servicios públicos.

Una tercera visión de la desigualdad es desde la justicia social. Esta visión apunta que la desigualdad en combinación con la inestabilidad del mercado laboral genera criminalidad, violencia e inseguridad social y socavar la cohesión social. En este sentido, la desigualdad es vista como generadora de tensiones sociales.

La cuarta visión es la de la integridad social, esta perspectiva coloca el énfasis en la integridad de los sistemas sociales y da prioridad a la inclusión social. La desigualdad socava el desarrollo individual y social, esta es una visión que empara con la perspectiva de derechos sociales de Thomas Marshall “Por elemento social quiero significar toda la variedad desde el derecho a una media de bienestar, económico y seguridad, hasta el derecho a compartir plenamente la herencia

social y a llevar la vida de un ser civilizado según las pautas prevalentes en la sociedad” (Marshall, T., 2005, p. 21).

Desde la perspectiva de la integridad social, las desigualdades niegan la identidad social, la cohesión social y la capacidad para el libre desarrollo ya que inhabilita y excluye a los más vulnerables.

1.1. Consecuencias de la desigualdad.

La humanidad ha logrado un crecimiento económico sin precedentes, pero a la vez existe una crisis en la calidad de vida de millones de personas. Esta es una contradicción que hace patente el estudio *The spirit Level* (2010), de Wilkinson y Pickett. El bienestar individual se ha constituido como el motor de las políticas económicas y sociales, por lo que es necesario pensar en que más allá del crecimiento económico, es necesario invertir en bienestar social y en fortalecer la cohesión social.

La desigualdad afecta la forma en que los individuos conviven y se relacionan en la comunidad. En sociedades desiguales existe agrupación entre los que son similares y exclusión de los diferentes (Wilkinson y Pickett, 2010). Podría considerarse a esta confianza como una medida para señalar que, a mayor equidad, más probable es construir sociedades basadas en la confianza que refuercen los lazos comunitarios.

Pero en las sociedades más desiguales, no solo existe mayor desconfianza, sino que esta desigualdad genera tensiones que ocasionan problemas. Como también muestran Wilkinson y Pickett (2010) los problemas sociales suelen presentarse más en las sociedades más desiguales, los cuales no pueden ser explicados solamente desde la pobreza, pues estos problemas pueden estar presentes en países con altos niveles de ingreso, por lo tanto, la variable definitiva es la desigualdad.

Los efectos de la desigualdad pueden ser observados en primera instancia en el crecimiento económico. Al respecto, Cingano (2014) hace un ejercicio para comprobar en efecto de la desigualdad económica en países de la OCDE, encontrando que la desigualdad que más afecta el crecimiento es la que ocurre entre el ingreso de los pobres y el segmento por encima del

umbral de pobreza y encuentra también que para el caso de México, entre 1985 y 2005 la desigualdad redujo el crecimiento del PIB en 10%, siendo el país con mayor costo entre los países de la OCDE.

En sociedades desiguales el crecimiento económico está acompañado de una mala distribución, es decir existe un desarrollo excluyente y no existe una correspondencia entre el ingreso per cápita y las tasas de pobreza (Esquivel, 2015).

El texto *The spirit level* (2010), respecto a los costes de la desigualdad muestra cómo esta se relaciona con diversas condiciones sociales que al mismo tiempo retroalimentan a la propia desigualdad. En Estados Unidos, los problemas mentales y el consumo problemático de drogas tienen una mayor persistencia en los estados más desiguales. En las sociedades más desiguales existen con mayor frecuencia problemas de estrés, trastorno de ansiedad, trastorno del estado de ánimo y trastorno de control de impulsos; estas condiciones tienen un impacto también en la salud física.

Ante las condiciones de desigualdad, el rendimiento académico suele ser menor. El contexto social y cultural de una persona, así como la dinámica familiar son un determinante del éxito escolar. Las familias con conflictos económicos y sociales tienen más dificultad para valorar el estudio. También tienen mayor dificultad para dar el apoyo material, emocional y académico que requieren. De acuerdo con Wilkinson y Pickett (2010), la pobreza no es el único factor que explica la deserción escolar, la relación entre pobreza y abandono es conocida, sin embargo, la problemática va más allá de la pobreza ya que las tasas de abandono son más altas que las de pobreza, por ello es necesario analizar las dinámicas sociales y familiares más allá de la pobreza.

Otra de las condiciones sociales asociadas a la desigualdad es la violencia. En las sociedades y zonas marginadas es más probable que se repitan los patrones de delincuencia; por el contrario, en las sociedades altamente cohesionadas las tasas de delincuencia suelen ser más bajas. De acuerdo con Wilkinson y Pickett (2010), los países que tienen una mayor desigualdad de ingresos, como Estados Unidos, Portugal e Israel son también los países con mayor número de homicidios; y, al contrario, los países con menor desigualdad son los que tienen menores tasas de homicidios, como Japón, Noruega y Dinamarca.

Alrededor del mundo, la desigualdad es un problema que afecta a millones de personas. Según las estimaciones de Oxfam (2016), en 2010 a nivel mundial existían 338 personas que concentraban la riqueza de 3,600 millones de personas, es decir la mitad de la población mundial. En 2015 la riqueza de la mitad de la población se concentraba en 62 personas. Entre 2010 y 2015 la riqueza de las 62 personas más ricas del planeta aumentó 44% mientras que la de la mitad de la población más pobre se redujo 41%.

La creciente desigualdad afecta a todo el mundo pues merma el crecimiento económico y debilita los lazos de cohesión social, sin embargo, es la población más pobre la que sufre las peores consecuencias.

Textos como *The spirit level* argumentan que es necesario reducir las desigualdades porque tienen consecuencias negativas para la sociedad, la desigualdad genera falta de cohesión social, problemas de salud, embarazos adolescentes y asenso en las tasas de crímenes, entre otros, y tratan de demostrar que la igualdad es el pilar fundamental sobre el que debe construirse una mejor sociedad.

II. Desigualdad y violencia

Existen dos marcos teóricos relevantes mediante los cuales es posible tener una aproximación a la relación entre violencia y desigualdad. El primero de ellos es el marco de las violencias estructurales desarrollado principalmente por Johan Galtung y por los estudios para la paz realizados a partir del término de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en Europa. El segundo marco es el de la cohesión social, cuyo origen se encuentra en la literatura de Emile Durkheim y en especial en los planteamientos hechos en *La división del trabajo social* y *El suicidio*.

2.1. Violencias estructurales.

El primer marco relevante para entender la relación entre desigualdad y violencia es el de la violencia estructural, introducido por Johan Galtung en 1969. Existen violencias visibles e invisibles que se encuentran en una dinámica donde se reproducen y nutren mutuamente. La conceptualización de las violencias en Galtung tiene tres dimensiones: una visible y dos invisibles.

La violencia directa es la violencia visible y refiere a todo tipo de actos que atenten contra la integridad de personas, colectividades o la propia naturaleza e incluye la violencia contra sí mismo. La violencia directa puede ser física o psicológica y en este tipo de violencia siempre hay actores claramente identificables: el agresor y el agredido (Galtung, 1969).

Las violencias invisibles son de dos tipos: la violencia estructural y la violencia cultural, ambas van más allá de una manifestación física o psicológica. Primero, la violencia estructural refiere a que existen formas de violencia más allá de la violencia física o directa, donde las estructuras sociales y económicas impiden que una persona se desarrolle y satisfaga sus necesidades básicas y les niega el cumplimiento de sus derechos humanos. La violencia estructural es causada por injusticias sociales y económicas y por el impedimento a los medios para satisfacer sus necesidades (Leyton y Toledo, 2012).

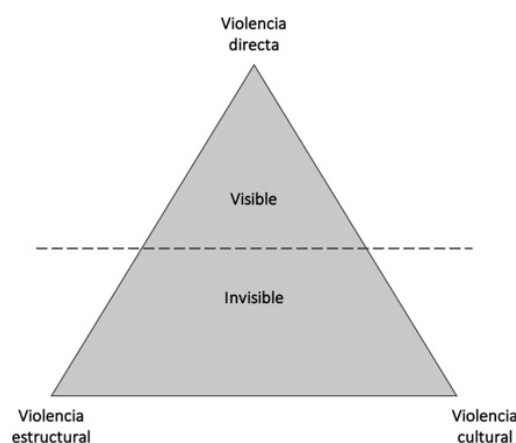
Finalmente, Galtung (1990) explica que la violencia cultural comprende las esferas culturales y simbólicas que legitiman a la violencia. La violencia cultural normaliza a la violencia

estructural, de manera que ésta se vuelve aceptable para la sociedad. Las estructuras culturales como religión, lenguaje, artes, ciencia se convierten en los medios que justifican a la violencia directa o estructural.

En este sentido, la desigualdad, como falta de capacidad para satisfacer necesidades básicas, es una condición que impone violencia a las personas. Galtung (1969, p. 168) afirma que “la violencia está presente cuando los seres humanos son influenciados de manera que sus relaciones somáticas y mentales reales se encuentran debajo de sus realizaciones potenciales (...) la violencia es definida como la diferencia entre lo potencial y lo real”.

Los tres tipos de violencia planteados por Galtung, directa estructural y cultural, constituyen una teoría integral relevante. Incorpora los actos visibles e invisibles de violencia incrustados en la sociedad y en los sistemas político, social y económico que dañan a las personas y las ponen en situaciones de desventaja al coartar y vulnerar el cumplimiento de sus derechos humanos. Estos tres tipos de violencia forman parte de un ciclo que se reproduce y retroalimenta.

Figura 1. Tipos de violencias.



Fuente: Elaboración propia, a partir del triángulo del conflicto (Galtung, 2003).

Los conceptos de violencia estructural y capacidades de Amartya Sen tienen mucha relación entre sí. Sen (1998) utiliza la categorización de libertad positiva y libertad negativa: la libertad negativa es aquella donde el individuo no tiene trabas por parte de un tercero (persona o institución) para realizar alguna actividad que él desee; en cambio, la libertad positiva es aquella donde la libertad se mide por la capacidad de un individuo de obtener logros. Asimismo, Sen

(1999) hace la clasificación de cinco libertades instrumentales: libertades políticas, oportunidades sociales, libertad de servicios económicos, garantías de transparencia y seguridad protectora.

Desde la perspectiva de Sen, la calidad de vida depende de lo que los individuos sean capaces de conseguir y de la disponibilidad de bienes y servicios sociales para satisfacer sus necesidades básicas. En este sentido, el bienestar individual varía dependiendo de las circunstancias personales, sociales y culturales; sin embargo, los recursos tienen un valor instrumental como requisitos para poder potenciar sus capacidades (Cejudo, 2007).

Esto no significa que la desigualdad o la injusticia social deban ser sustituidos por el término de violencia estructural, sino que la conceptualización, en términos de violencia, tiene una utilidad analítica para entender las relaciones entre la insatisfacción de las necesidades humanas básicas y cómo estas pueden ser utilizadas para explicar a la violencia directa.

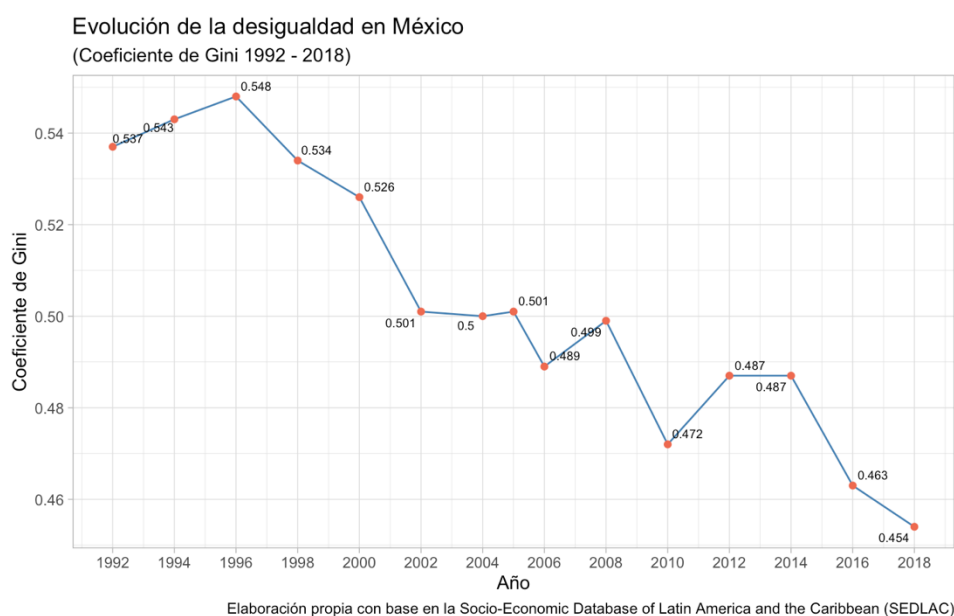
Byung-Chul Han (2016) hace una crítica al concepto de violencia estructural de Galtung, para Han este es un concepto de violencia muy extendido y ambiguo, y no logra distinguir la violencia de otras condiciones sociales negativas, “el hecho de que los niños de clase obrera tengan menos oportunidades de educación que los de clase alta, no es violencia, sino una injusticia” (Han, 2019, p. 118). Para Han, si se toma a la violencia como una medida de toda la negatividad social, el concepto se desdibuja y ve a la violencia estructural más como una forma de dominación, que permite que esta dominación sea más discreta y eficiente que la dominación violenta.

No obstante, existe un reconocimiento a que la violencia estructural genera las formas más sutiles de dominación y coerción que impone relaciones de explotación. Se trata de una violencia intrínseca al sistema que escapa a la violencia visible.

2.2. Caracterización de la desigualdad en México.

Desde una perspectiva comparada y de acuerdo con la *Socio-Economic Database of Latin America and the Caribbean (SEDLAC)* del Banco Mundial, la desigualdad en México ha disminuido desde mediados de los años 1990.

Gráfica 1. Coeficiente de Gini 1992 - 2018



Sin embargo, de acuerdo con la *Standardized World Income Inequality Database (SWIID)*, México se encuentra dentro del 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo, según la medición de la desigualdad por ingresos, medida por el índice de Gini. Este índice toma el valor de 1 para perfecta desigualdad y de 0 para perfecta igualdad.

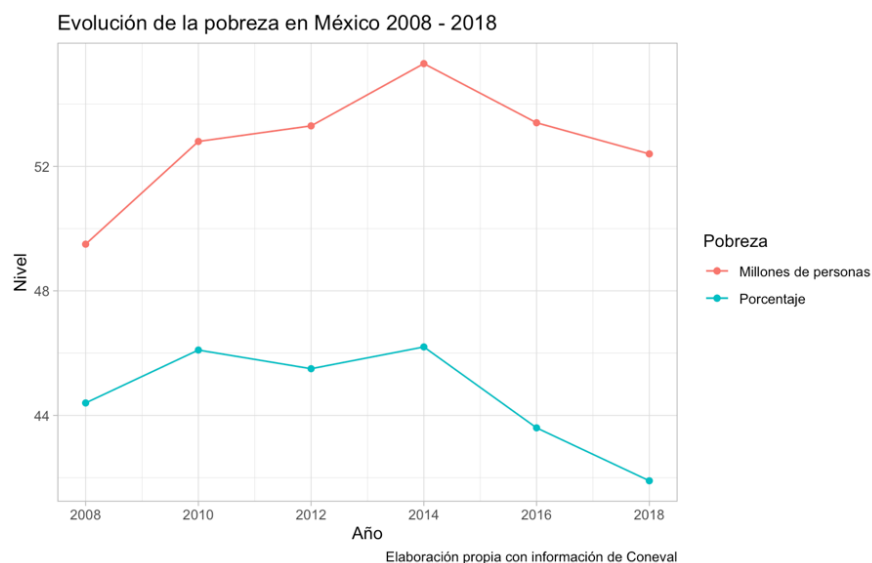
Entre 2010 y 2015 el índice de Gini promedio entre países de la OCDE fue de 0.311, mientras que el promedio de México, en el mismo periodo, fue de 0.456, el índice más alto para la OCDE. En comparación con países de Latinoamérica, entre 2010 y 2015, México tiene un coeficiente de Gini mayor a Brasil (0.455), Chile (0.449), Argentina (0.384) y Uruguay (0.371).

Si bien existe una tendencia decreciente en la desigualdad de ingreso medida por el coeficiente de Gini, tanto en la SEDLAC y en la SWIID; esto no es compatible con el estancamiento de la

pobreza y con el incremento en el número de personas en situación de pobreza. De acuerdo con la medición de la pobreza que realiza el CONEVAL, entre 2008 y 2018, existe una ambivalencia en el comportamiento de la pobreza. Por un lado, el porcentaje de la población en situación de pobreza se redujo de 44.4% en 2008 a 41.9% en 2018; sin embargo, el número de personas aumentó durante el mismo periodo, de 49.5 millones en 2008 a 52.4 millones de personas en 2018, como se muestre en el siguiente gráfico.

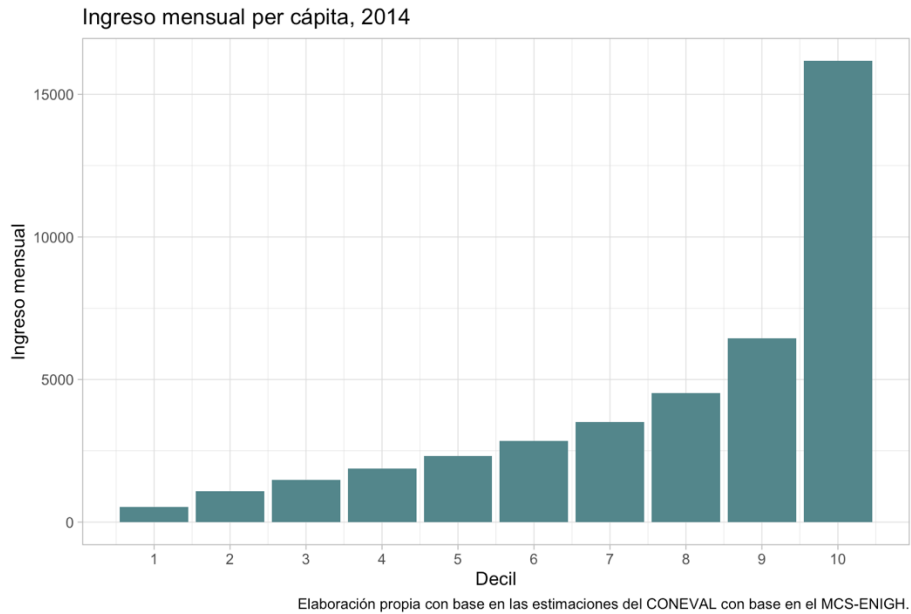
Esta dicotomía entre la reducción de la desigualdad de ingreso, reducción del porcentaje, pero incremento del número de personas en situación de pobreza; podría indicar que a pesar del incremento del ingreso per cápita, existe una concentración de la riqueza en los deciles más altos de la población. De acuerdo con Esquivel (2015) en México, 10% de la población más rica concentra 64.4% de la riqueza del país, mientras que 1% de los mexicanos más ricos concentran el 21% de la riqueza.

Gráfica 2. Evolución de la pobreza en México 2008 - 2018



De acuerdo con las estimaciones del CONEVAL, durante 2014, los ingresos per cápita del primer decil representaba 3% del ingreso del decil más alto, y la suma de los ingresos entre el primer y séptimo decil representa 84% del ingreso del decil más alto.

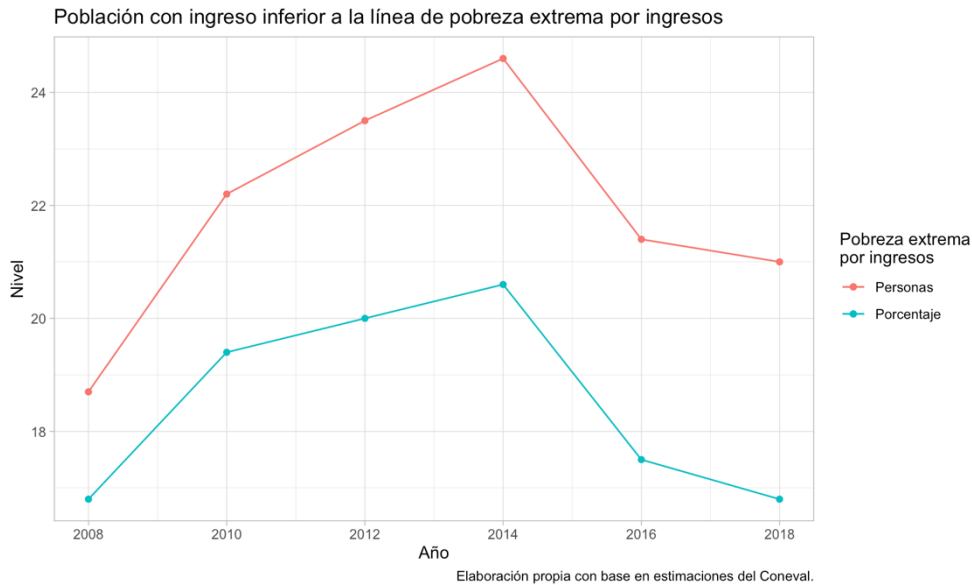
Gráfica 3. Ingresos por deciles.



La línea de pobreza extrema por ingreso es un indicador de bienestar, y es un referente monetario para comparar el ingreso de los hogares con el valor de la canasta básica, de manera que un grupo poblacional cumpla con las recomendaciones nutricionales, como una medida de bienestar y de acceso a servicios básicos de alimentación. Entre 2008 y 2018 este indicador muestra dos tendencias: por un lado, un incremento tanto en el porcentaje como en el número de personas en situación de pobreza extrema entre 2008 y 2014; y, por otro lado, una disminución de 2014 a 2018. Sin embargo, esta reducción no es menor a los niveles de 2008.

En lo referente al porcentaje de personas en pobreza extrema, en 2008 y en 2018 mantienen el mismo nivel de 16.8% con un incremento máximo a 20.6% en 2014. Respecto al número de personas la tendencia es la misma, sin embargo, de 2008 a 2018 hay un incremento de 18.7 a 21 millones de personas con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema.

Gráfica 4. Evolución de la pobreza extrema en México 2008 – 2018



Es necesario afrontar las desigualdades y las asimetrías entre los diferentes grupos de la población para consolidar los procesos de desarrollo y para lograr transformaciones económicas y sociales. Por ello son necesarios cambios estructurales para la igualdad y la sostenibilidad, orientadas al cierre de las brechas sociales.

2.3. Violencia directa en México.

Las tensiones sociales que se generan en una sociedad tan desigual como México pueden ser explicadas como el motor de la violencia en el país. La exclusión en amplios sectores de la sociedad, especialmente en educación y empleo son un factor que propicia la violencia.

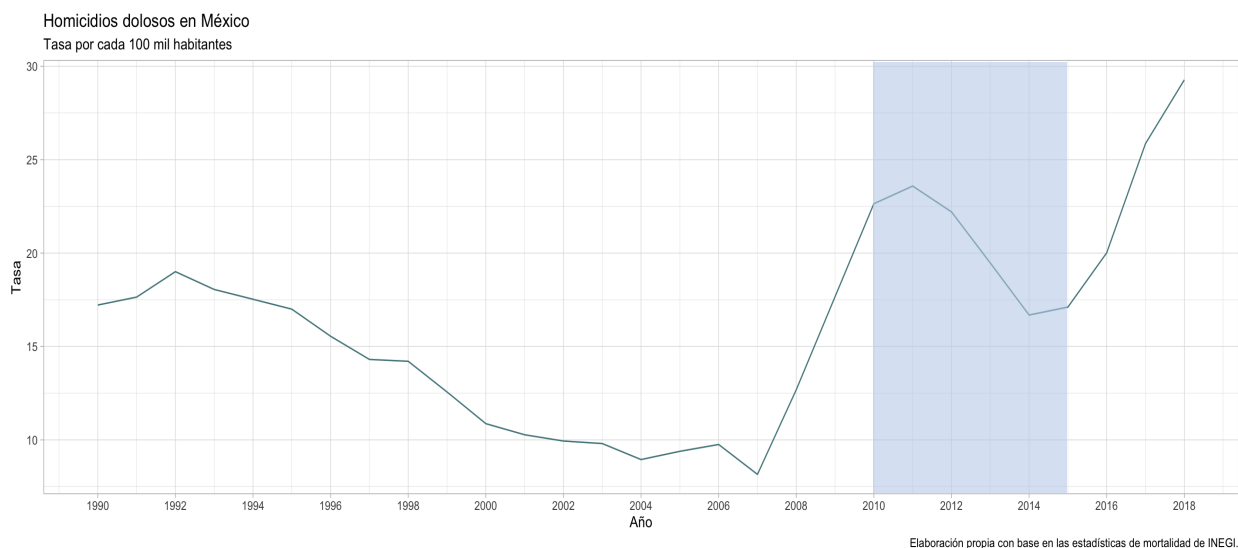
El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 estableció el inicio de la Estrategia General de Combate al Narcotráfico y la Delincuencia Organizada con el objetivo de recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad mediante el combate frontal al crimen organizado. Esta estrategia significó la incursión de las fuerzas armadas en el ámbito civil para realizar acciones de seguridad pública y supuso el despliegue de 500,000 elementos de las fuerzas armadas entre

marina y ejército, además del acompañamiento de los cuerpos federales, estatales y municipales de la policía (CIDE, 2018, p. 54).

A partir de esta estrategia, México vive una situación de delincuencia y crímenes violentos a gran escala, donde las víctimas se cuentan por miles. Esta situación no ha podido ser atendida desde las instituciones y mecanismos ordinarios de justicia, y en gran medida, tampoco han podido ser explicados sus orígenes más profundos.

El homicidio es la expresión más extrema de la violencia. En México el incremento de los homicidios a partir de 2007 se ha mantenido constante. De acuerdo con el INEGI, en 1990 se reportó una tasa de homicidios de 16.6 por cada cien mil habitantes, en 2007 se tuvo un mínimo histórico de 8.1; pero en 2017, la tasa de homicidios alcanzó la cifra de 26 homicidios por cada cien mil habitantes, un máximo histórico.

Gráfica 5. Homicidios en México 1990 - 2018



De acuerdo con la información de INEGI, la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes durante el periodo de 1990 a 2017 muestra dos tendencias: La primera se observa entre 1990 y 2006 que se caracterizó por una disminución paulatina de la tasa; la segunda tendencia comienza en 2007 con un aumento abrupto en el número de homicidios que duró hasta 2011, cuando se alcanzó un primer máximo histórico con 23.5 víctimas por cada cien mil habitantes. Si bien

hubo un descenso entre 2012 y 2014, a partir de 2015 se registró nuevamente un incremento de los homicidios, alcanzando un nuevo máximo histórico en 2017.

En valores absolutos, el número de homicidios tiene la misma tendencia decreciente a partir de 1992 hasta alcanzar un mínimo histórico en 2007 con 8,867 casos en el país; sin embargo, a partir de 2008 hay un incremento abrupto, hasta alcanzar un primer pico en 2011 con 27,213 homicidios. A partir de 2012 existe nuevamente una reducción en los casos hasta 2014, pero a partir de 2015 hay un incremento aún mayor hasta alcanzar un segundo pico y máximo histórico en 2018 con 36,686 homicidios.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública ENVIPE revela que los mexicanos consideran que la inseguridad y la delincuencia son los principales problemas que aquejan a su entidad federativa. Asimismo, la violencia y la delincuencia son los temas más difíciles de atender. De acuerdo con Elena Azaola (2012) hay tres factores que explican los niveles actuales de violencia:

Primero, la herencia de un México ya violento, que refiere a las formas de violencia que existían desde tiempo atrás, no relacionadas directamente con las actividades de grupos criminales pero que han sido tolerados e ignorados (e.g. el machismo, homofobia, misoginia, racismo, etc.) estas violencias, sumadas al contexto actual se han acumulado y contribuido al escalamiento de la violencia que se vive en la actualidad. Azaola llama a este tipo de violencia las “violencias de siempre” (Azaola, 2012, p. 8).

Segundo, el debilitamiento de las instituciones del Estado mexicano, que refiere a la descomposición institucional, principalmente en las de procuración de justicia y seguridad pública, las cuales cuentan con bajas capacidades para investigar y procesar delitos y sus responsables, lo cual ha ocasionado un incremento en la impunidad, que a su vez ha dado como consecuencia el incremento de la criminalidad y la violencia. La autora llama a este tipo de violencia lo llama “la violencia de hoy” (Azaola, 2012, p. 8).

Tercero, las políticas sociales deficientes que no mitigan la marginalidad, la pobreza y la falta de inclusión social, que refiere a las políticas económicas y sociales que han sido insuficientes para reducir las desigualdades y han mantenido excluidos a grandes sectores de la población. A este tipo de violencia, Azaola lo llama “violencia estructural” (Azaola, 2012, p. 8) y argumenta

que, a pesar de ser una violencia normalizada, tiene grandes efectos en la exacerbación de la violencia que vive México actualmente.

La combinación de estos tres factores permite tener una comprensión más amplia de un fenómeno tan complejo como en de las violencias en México. No es posible tratar de comprender la violencia generada por una estrategia del combate frontal al crimen organizado, al margen de condiciones estructurales de desigualdad y de descomposición social e institucional.

2.4. La cohesión social.

El segundo marco para la aproximación a entender la relación entre desigualdad y violencia es el de la cohesión social. El estudio de la cohesión social permite comprender cómo la inestabilidad social afecta a las personas, el grado de consenso y el sentido de pertenencia a un grupo. A pesar del progreso económico que puede tener una sociedad, persisten condiciones de desigualdad que caracterizan a la falta de cohesión social.

Los antecedentes teóricos de la cohesión social ubican al concepto en la contribución de Emile Durkheim, en particular en lo planteamientos realizados en *La división del trabajo social* (1882), quien utiliza el concepto como una forma de aproximarse a los factores que favorecen o impiden la unión entre individuos en una comunidad (CONEVAL, 2015).

Durkheim señala que la modernización de las sociedades implica un desgaste de las formas de solidaridad, por ello las sociedades se enfrentaron a un proceso de diferenciación que derivó en la división del trabajo social (Durkheim, 1897). En este sentido, la conciencia colectiva, entendida como un sistema de creencias y normas comunes, pierde importancia como fuente de cohesión en las sociedades industriales.

Según el autor, existe una mayor vinculación entre de individuos con el grupo social cuando la división del trabajo es menor, a este tipo lo llama “solidaridad mecánica” y es característica de sociedades donde existen coincidencias en los sentimientos sociales de individuos, cuyas aspiraciones y móviles son muy parecidas. Por otro lado, en las sociedades donde existe una mayor complejidad y especialización en la división del trabajo, se debilitan los vínculos y la

autonomía de los individuos, entonces se produce una “solidaridad orgánica” donde la integración debe fundarse en sistemas normativos complejos, especializados y capaces de asegurar un equilibrio en un contexto de gran división social del trabajo. La división del trabajo social supone una separación de las funciones sociales, pero también una progresiva individuación, un debilitamiento de los vínculos comunitarios y familiares; es entonces cuando la cohesión social es necesaria para garantizar la solidaridad y reforzar los vínculos sociales (Barba, 2011).

La cohesión social parte de una serie de elementos de carácter ideal, es decir, creencias, normas y valores; otras de carácter relacional, la existencia de vínculos sociales generados en una sociedad; pero también elementos como la distribución de bienes materiales, económicos y sociales, a partir de los vínculos sociales establecidos entre individuos, arreglos institucionales y por la cultura política de una sociedad (CONEVAL, 2015).

El concepto de cohesión social refiere a las características de los vínculos sociales que permiten a los miembros de una sociedad tener un sentido de pertenencia, confianza en los demás y reconocimiento de la legitimidad de las instituciones (Barba, 2011). En este sentido, la cohesión social es vista como un atributo de las sociedades que comparten valores igualitarios y que desarrollan estrategias, políticas e instituciones encaminadas a la reducción de las desigualdades, la exclusión, pobreza y discriminación.

El concepto de cohesión social importa porque es útil para hacer visible el deterioro de las condiciones y procesos de una sociedad con “buen funcionamiento”, así, la falta de cohesión es entendida como procesos de división, de polarización económica y de pérdida de marcos comunes de convivencia (CONEVAL, 2015) que pueden contribuir al incremento de la criminalidad y la violencia en las sociedades poco cohesionadas.

Existen diversas perspectivas institucionales sobre la cohesión social. La presente investigación retoma las visiones institucionales de la OCDE y la CEPAL, cuyos enfoques de política pública son más cercanos a la realidad latinoamericana y en específico a la realidad mexicana.

Perspectiva de la OCDE sobre cohesión social

De acuerdo con Jeannotte (2000), en la OCDE la cohesión social puede ser entendida como un sinónimo de ausencia de conflictos. A pesar de que no existe un consenso sobre una definición clara de lo que es cohesión social, sí hay claridad en entender que ésta se refiere a asegurar que las sociedades y economías sean más incluyentes. La cohesión social es concebida como un recurso para lograr el bienestar social, con base en la estabilidad social, crecimiento económico y el desarrollo.

La OCDE ve que los principales retos que enfrenta la cohesión social pueden ser agrupadas en dos categorías (Jeannotte, 2000):

1. Presiones socioeconómicas.
 - a. Cambios en las condiciones de empleo.
 - b. Pobreza, desigualdad de ingreso y exclusión social.
 - c. Déficit de habilidades en economías basadas en conocimiento.
2. Presiones sociopolíticas
 - a. Desencanto de la política y cambios en la gobernanza.
 - b. Diversidad y cambios demográficos.
 - c. Cambio de valores respecto al trabajo y la sociedad.

Dentro de los objetivos y preocupaciones de la OCDE está la de mantener un equilibrio y estabilidad entre el crecimiento económico y la estabilidad social y política. En este sentido, hay dos visiones que compiten y se contraponen: aquella visión que apuesta por la no regulación, el libre mercado y los ajustes estructurales para crear empleo y de este modo liberar las tensiones sociales y políticas; y otra visión que estipula que la cohesión social no está relacionada solamente con el mercado de trabajo, sino que son necesarios cambios en las instituciones políticas y sociales para lograr la cohesión social. (Jeannotte, 2000, p. 83).

Para la OCDE existe un predominio de la primera visión que busca equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social. Esta visión considera que la cohesión social es una precondition para la flexibilidad y el crecimiento económico. En este sentido, la participación de los gobiernos debe dirigirse a mitigar los problemas sociales para que los ciudadanos tengan la capacidad de adaptarse a los cambios sociales (CONEVAL, 2015).

A pesar de no existir un consenso en la definición del concepto de cohesión social, la OCDE establece que una sociedad está cohesionada si vela por el bienestar de todos sus miembros, lucha contra la exclusión y la marginalización, crea sentido de pertenencia y sus miembros tienen la oportunidad de movilidad social (OCDE, 2011, p. 53). Es decir, la cohesión social refiere a una sociedad estable, segura, justa, que se basa en la protección de los derechos humanos, no discriminación, tolerancia, respeto por la diversidad, igualdad de oportunidades, solidaridad y la participación de grupos vulnerables.

Esta definición establece tres componentes o elementos clave del concepto de cohesión social: 1) inclusión social, entendida como oposición a la exclusión social, pobreza y la desigualdad; 2) capital social, que abarca el sentido de pertenencia, confianza y la participación cívica; y 3) movilidad social, como el grado en que las personas pueden cambiar su posición social.

Para medir el grado de cohesión social, la OCDE propone una medición con cuatro elementos:

1. Desigualdad de ingreso. Este es un elemento esencial para medir las brechas de pobreza y evaluar la evolución de la cohesión social.
2. Grado de cohesión de una sociedad. Este elemento depende de la participación de la sociedad en la economía productiva y es medida con las tasas de empleo como una forma de monitorear la satisfacción y el riesgo de tensiones sociales.
3. Nivel de bienestar. Este elemento mide equidad e inclusión a través de mediciones como esperanza de vida y nivel educativo.
4. Capital social. Estas medidas generalmente incluyen la pertenencia a grupos y confianza interpersonal.

El predominio de la visión económica de la OCDE recae en el argumento de que en una sociedad los sectores marginados contribuyen menos a la economía, tienen menos educación y habilidades para contribuir al desarrollo, menos capital para invertir, no son respetados ni tratados completamente como ciudadanos. En este sentido, la cohesión social permite que existan sociedades con sentido de pertenencia, con confianza y estables, permitiendo la reducción de conflictos sociales como la delincuencia.

La cohesión social desde la visión de la CEPAL

En América Latina, el contexto para insertar el concepto de cohesión social es muy distinto a otras partes del mundo. A diferencia de la Unión Europea, no existe un marco político de integración regional ni existen los recursos suficientes para implementar políticas de cohesión como se ha hecho en Europa. El concepto de cohesión social para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) surgió como una necesidad para atender los problemas históricos de pobreza, extrema desigualdad y exclusión en la región de América Latina. Algunos de los principales retos que enfrenta la sociedad latinoamericana son lograr crecimiento económico con equidad, segmentación del mundo del trabajo, y una profunda discriminación y negación de las diferencias raciales, étnica y culturales.

La CEPAL define a la cohesión social como “La eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social y los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad” (CEPAL, 2007, p. 12). Al hablar de mecanismos, refiere al empleo, los sistemas de educación, políticas públicas que fomenten la inclusión, el bienestar y la protección social. Por comportamientos y valoraciones de los ciudadanos, refiere a la confianza en las instituciones, sentido de pertenencia, solidaridad, aceptación de las normas de convivencia y la participación en espacios de deliberación.

Definida de esta forma, la cohesión social implica el reconocimiento de los derechos sociales de ciudadanía. Thomas Marshall plantea el desarrollo de los derechos de ciudadanía como tres estados: el primero de derechos civiles, estos son los derechos necesarios para la libertad individual de las personas, libertad de expresión, de palabra y pensamiento; el segundo el de los derechos políticos, refiere al derecho a participar en el poder político como elector o como un miembro dotado de autoridad, y el tercero el de los derechos sociales, “me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad” (Marshall, 1949, p.p. 302 - 303).

Desde la perspectiva de la CEPAL, la política pública puede influir en la realización de la cohesión social mediante cuatro enfoques complementarios: 1) generación y desarrollo de

oportunidades productivas, 2) fomento de las capacidades personales, 3) generación de redes inclusivas de protección social, y 4) gestión eficiente de las finanzas públicas (CEPAL, 2007).

1. Oportunidades productivas. Para fortalecer la cohesión social, debe considerarse la segmentación en términos de productividad laboral y la magnitud de la informalidad. Con el fin de integrar al mayor número de personas que laboran en la informalidad a los mercados de trabajo formales y contribuir a mejorar la protección y calidad de los empleos.
2. Desarrollo de capacidades personales. Este punto refiere específicamente al ámbito educativo. La relación entre educación y cohesión social es decisiva, ya que la educación genera igualdad de oportunidades y es el principal resorte para superar la pobreza y las causas que la producen: baja productividad laboral, escaso acceso a tecnologías, marginalidad y vulnerabilidades en salud.
3. Protección social. Riesgos como desempleo, enfermedad o pérdida de ingresos en la vejez, son factores que determinan el bienestar de las personas en el corto y largo plazo. Prever y atender estos riesgos hace que los miembros de una comunidad sientan que efectivamente pertenecen a un sistema de interacción y cooperación.
4. Finanzas públicas. Dos aspectos son fundamentales, uno la estructura del mercado de trabajo y los trabajadores inscritos en un sistema contributivo; y el segundo aspecto es la carga impositiva que permitirá al Estado destinar recursos para políticas que contribuyan a generar una mayor cohesión.

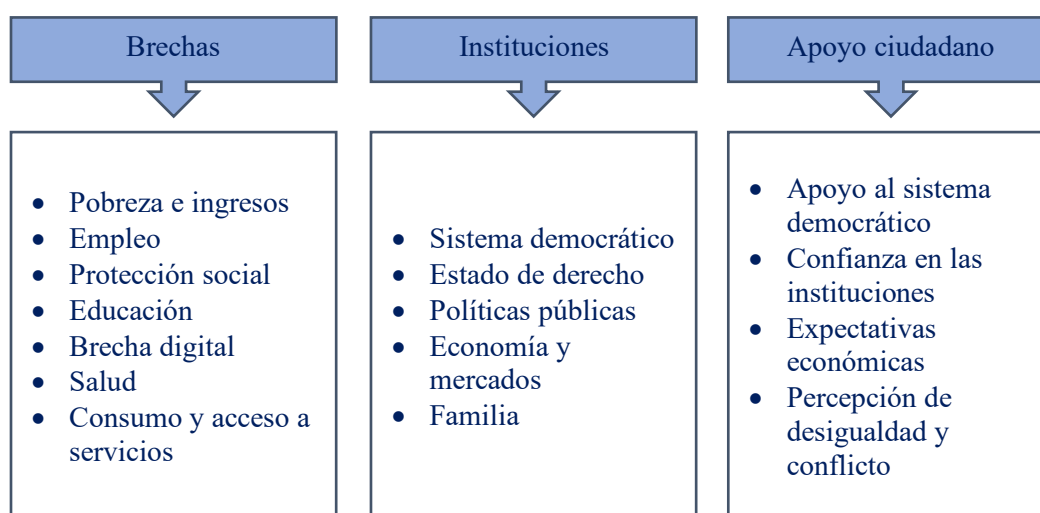
Para operacionalizar el concepto de cohesión social, la CEPAL busca reducir las brechas sociales con el apoyo ciudadano y para hacerlo se basa en tres pilares: las brechas sociales, la capacidad institucional y el apoyo ciudadano. Las brechas sociales indican la forma en que un país es afectado por la falta de acceso a derechos básicos y la desigualdad. Incluye pobreza e ingresos, empleo, protección social, educación, salud, brecha digital y consumo y acceso a servicios.

Las capacidades institucionales demuestran las dinámicas vinculadas al funcionamiento de distintos ámbitos institucionales que tienen una incidencia directa en atenuar las brechas sociales. Incluye democracia, estado de derecho, políticas públicas, economía y mercados y

familia. Los países latinoamericanos deben fortalecer sus capacidades institucionales, democráticas y del estado de derecho para disminuir brechas sociales.

El apoyo ciudadano es un factor subjetivo para la cohesión social, incluyen principalmente estudios de opinión pública tales como apoyo al sistema democrático, confianza en las instituciones, expectativas económicas, y percepción de desigualdad y conflicto.

Figura 2. Indicadores de cohesión social.



Fuente. América Latina en clave de cohesión social. Indicadores seleccionados. CEPAL 2010.

Existe una cadena causal entre la desigualdad, la cohesión social y la violencia donde las condiciones de desigualdad como las brechas de ingreso, brechas salariales, desigualdades de género, entre otras, deterioran los lazos de cohesión social y abonan a la falta de solidaridad y sentido de pertenencia a un grupo. Ambas condiciones son características de las sociedades más violentas, generando nuevamente el círculo vicioso donde la desigualdad y la violencia se producen mutuamente.

La desigualdad es un factor fundamental en el origen del conflicto social y por tanto afecta negativamente a la cohesión social y a la inversa, la igualdad es una condición preexistente sobre la que opera la cohesión social. La efectividad de las políticas públicas es mayor en sociedades

con cohesión social, que en aquellas que enfrentan problemas de exclusión o que están fragmentadas (Berger-Schmitt, 2000).

Si la pobreza, las desigualdades, la exclusión y la discriminación son factores que obstaculizan la cohesión social, entonces es necesario incluir estos problemas en la formulación de políticas encaminadas a lograr la cohesión social. De ese modo, la cohesión social no solo es vista como un atributo de sociedades que comparten valores, sino que comparten valores igualitarios y desarrollan estrategias, políticas e instituciones para reducir las desigualdades sociales.

El enfoque de cohesión social orienta el diseño de las políticas públicas en dos dimensiones. La primera, se enfoca en las condiciones socioeconómicas para contrarrestar los problemas sociales como exclusión social, pobreza, desigualdad y desempleo; la segunda dimensión, refiere a la calidad de las relaciones y la interacción entre los individuos, grupos e instituciones para fomentar las condiciones que favorezcan la solidaridad, cumplimiento de derechos humanos e identidad. Es necesario tomar conciencia de la falta de cohesión social y a partir de este reconocimiento tomar medidas y mejores políticas públicas orientadas al disfrute de una calidad de vida aceptable (CONEVAL, 2015).

Estudios previos sobre la relación entre desigualdad y violencia.

No es casual que tanto las víctimas como quienes participan de la violencia, pertenezcan al mismo tiempo, a las clases sociales más desfavorecidas. Los sectores más vulnerables son víctimas de la violencia directa y víctimas de la violencia estructural. En una primera aproximación, y en un contexto de violencia generalizada, es posible afirmar que las necesidades económicas de las personas son un aliciente para que participen en actividades criminales y al mismo tiempo, son objeto para la cooptación por parte de grupos criminales.

Estudios realizados en Estados Unidos entre 1940 y 1970, mostraron que existe una relación positiva entre la inequidad y el ingreso, con los crímenes patrimoniales y violentos; y que la desigualdad económica es la raíz de los crímenes violentos. También, en las áreas urbanas de Estados Unidos, la pobreza mostró una relación significativa con los crímenes patrimoniales,

mientras que la desigualdad no tiene efectos sobre estos crímenes, sin embargo, cuando se analizan los crímenes violentos, la desigualdad tiene una relación positiva (López-Calva, 2014).

En América Latina, la pobreza y la desigualdad tienen una relación positiva en las siete principales ciudades de Colombia; en Centroamérica, se ha encontrado que una reducción en la desigualdad tiene relación con la reducción de homicidios (Poveda, 2011; Nadanovsky y Cunha-Cruz, 2009). En Sudáfrica se encontró que la desigualdad está asociada con los altos índices de delitos patrimoniales y delitos violentos a nivel de vecindario (Özler, 2005).

En México se han realizado pocos esfuerzos por explicar, de manera sistémica, las causas y las consecuencias del crimen organizado, la razón por la que no se han realizado estudios empíricos es principalmente la falta de datos. Se han realizado estudios que han comprobado que los municipios con mayores niveles de pobreza y desigualdad tienen mayores niveles de violencia criminal. Por ejemplo, un estudio del Banco Mundial evidencia que durante el periodo 2006 a 2010 existe una relación positiva entre el aumento de la desigualdad, medida con el coeficiente de Gini y el incremento de los crímenes violentos (Osorio, 2012; López-Calva, 2014).

Por otro lado, se han buscado las causas de los delitos contra la salud, con la propuesta de que el crimen organizado y los delitos contra la salud son producto de un estado de anomia institucional, demostrando que la economía informal ha servido como tiene una relación negativa con los delitos contra la salud, es decir, a mayor nivel de informalidad menos delitos contra la salud (Vilalta, 2012).

Otros estudios han encontrado que el aumento de la desigualdad entre estados y municipios, y la posición estratégica de algunos municipios, tienen una relación positiva respecto al número de ejecuciones perpetradas por el crimen organizado (Osorio, 2012). De la misma manera, se ha identificado que la población masculina entre 19 y 24 años, que no estudia ni trabaja, es más vulnerable a la violencia criminal y tiene una relación positiva con el incremento de la violencia (Gómez y Merino, 2012).

Recientemente se analizaron, desde un caso regional, los efectos de las variables económicas y sociales sobre el incremento de la violencia. Como resultado de este análisis se encontró que en los 31 municipios de tierra caliente (entre Guerrero, Michoacán y Estado de México), la baja escolaridad y alta desigualdad, en un contexto de guerra criminal, abren oportunidades para que

jóvenes se enlisten en el crimen organizado, y que un aumento en los salarios puede funcionar como una política de prevención del delito (Zepeda, 2018).

III. Metodología

3.1. Datos.

Para comprobar si existe relación entre violencia y desigualdad en México, desde una perspectiva metodológica, la variable dependiente es la tasa de homicidios con arma de fuego por cada 100,000 habitantes. Dado que la violencia directa es la violencia visible, física, verbal y psicológica, y se manifiesta como conductas; dentro de ésta la forma más extrema de violencia es el homicidio, además en el contexto mexicano de estrategia de lucha frontal contra el crimen organizado, el homicidio con arma de fuego es una aproximación más específica para explicar la relación de violencia y desigualdad en este contexto.

La fuente de información para los homicidios con arma de fuego es la información que mensualmente publica el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Es importante señalar que la información publicada por el SESNSP tiene problemas de confiabilidad que ha sido señalado por organizaciones de la sociedad civil especializadas, como México Unido Contra la Delincuencia (Galindo et.al., 2018) y Causa en Común.

Un primer problema sobre la confiabilidad de los datos del SESNSP corresponden al número total de delitos reportados, es decir averiguaciones previas iniciadas y son reportadas por las procuradurías y fiscalías estatales, quienes se encargan de clasificar y registrar los delitos. Esto implica que en las entidades federativas existen diferentes capacidades para el registro y clasificación de delitos. A partir de 2015 el SESNSP publica también las cifras de víctimas de homicidio, sin embargo, no están desagregadas a nivel municipal.

Por otro lado, las bases de datos que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son más confiables ya que estas se basan en la recopilación de certificados y actas de defunciones de la secretaría de salud y registro civil. Entre 1990 y 1997 existe una clasificación por homicidios y lesiones infringidas, por tipo de homicidio y tipo de arma utilizada. Esta clasificación cambia a partir de 1998 existe una nueva clasificación de agresiones por tipo de homicidio desagregado por tipo de arma, lugar de ocurrencia, entre otros.

Para la construcción de la variable dependiente es utilizada la información de homicidios publicada por INEGI calculando la tasa por cada 100,000 habitantes con la población municipal

utilizada por CONEVAL para la medición multidimensional de la pobreza, para los años 2010 y 2015.

Las variables independientes son las siguientes:

El coeficiente de Gini que es una herramienta utilizada para medir la distribución desigual por ingreso. El coeficiente de Gini es un número entre 0 y 1 donde 0 significa que cada persona tiene la misma cantidad de recursos, perfecta igualdad y 1 que una sola persona concentra toda la riqueza, perfecta desigualdad. En México, el CONEVAL utiliza el coeficiente de Gini como uno de los indicadores para medir la cohesión social. El coeficiente de Gini es utilizado a nivel municipal.

El Índice de Rezago Social (IRS), construido por el CONEVAL y utilizado como uno de los dos indicadores a nivel municipal para medir la cohesión social en México. Es una medida ponderada que resume once indicadores de información referente a la educación, el acceso a los servicios de salud, la calidad de la vivienda, los servicios básicos en la vivienda y los activos del hogar. La finalidad es ordenar y clasificar a municipios y entidades federativas de acuerdo con sus niveles de indicadores sociales, utilizando la metodología de componentes principales. Las once variables utilizadas para la construcción del IRS son las siguientes:

1. Porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.
2. Porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.
3. Porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta.
4. Porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud.
5. Porcentaje de viviendas con piso de tierra.
6. Porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario.
7. Porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública.
8. Porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje.
9. Porcentaje de viviendas que no disponen de energía eléctrica.
10. Porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora.
11. Porcentaje de viviendas que no disponen de refrigerador.

Es importante señalar que este índice no corresponde a la medición de la pobreza ya que en su construcción no se utilizan variables de ingreso, acceso a seguridad social ni acceso a

alimentación; sin embargo, es una herramienta útil pues en un solo indicador resume cuatro indicadores de carencias asociadas al fenómeno de desigualdad en México. El IRS es utilizado a nivel municipal.

El porcentaje de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar a nivel municipal, también tomado de CONEVAL, este indicador es de utilidad ya que complementa precisamente esa dimensión de pobreza que no capta el IRS.

El porcentaje de población desocupada a nivel municipal, tomada de las encuestas intercensales de INEGI de 2010 y 2015, de acuerdo con la literatura de cohesión social, la desocupación es una de las principales variables para captar el fenómeno de la desigualdad.

También de las encuestas intercensales son tomados el porcentaje de familias con jefatura femenina y el porcentaje de población mayor a 12 años, divorciada, separada o viuda, a nivel municipal. Estas dos variables están relacionadas con las dinámicas de funcionamiento familiar que impactan en la descomposición de las redes familiares y por tanto tiene consecuencias en la erosión de la cohesión social.

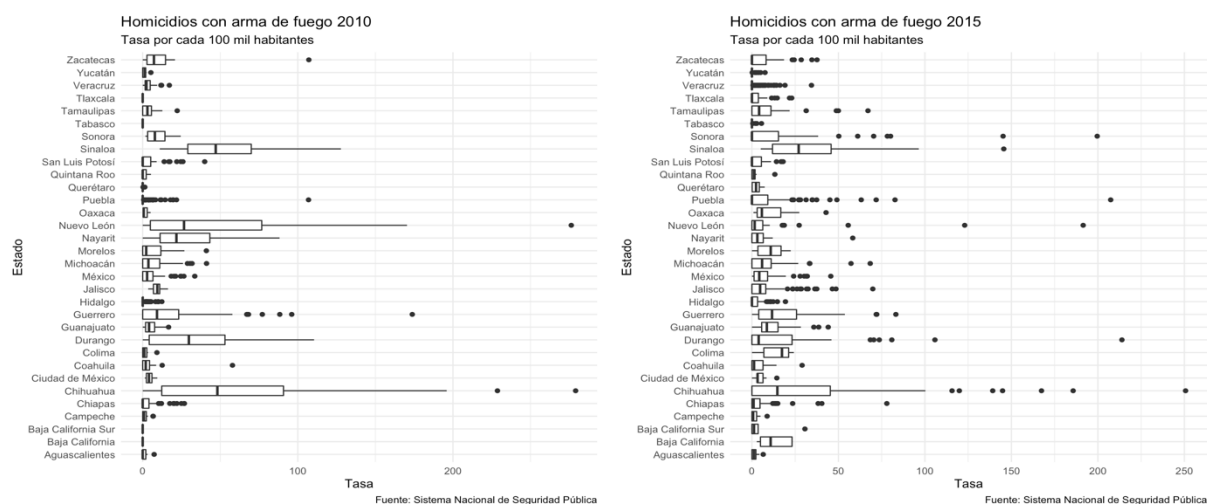
Como variables de control se utilizan la información a nivel estatal de decomiso de armas, personas detenidas en operativos militares y cantidad de marihuana incautada medida en kilogramos, información que es recuperada del Programa de Políticas de Drogas del CIDE (PPD-CIDE), esta información se recopiló a partir de solicitudes de información realizadas a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) a partir de 2008, sin embargo, la última información disponible es hasta el año 2014, ya que la SEDENA se negó a continuar contestando a dichas solicitudes de información. Por tal motivo es importante aclarar que los datos 2014 de estas tres variables son utilizados como un proxy para 2015.

Finalmente, el número de observaciones depende de la cantidad de municipios que efectivamente tienen un valor registrado en la variable dependiente, la tasa de homicidios; por lo tanto, el número de observaciones para la base 2010 es de 1,292 municipios y para 2015 es de 1,505 municipios.

En un primer análisis a partir de la estadística descriptiva, es posible observar que a pesar de que, en promedio, se observa una reducción en los homicidios de 2010 a 2015, la mediana tiene

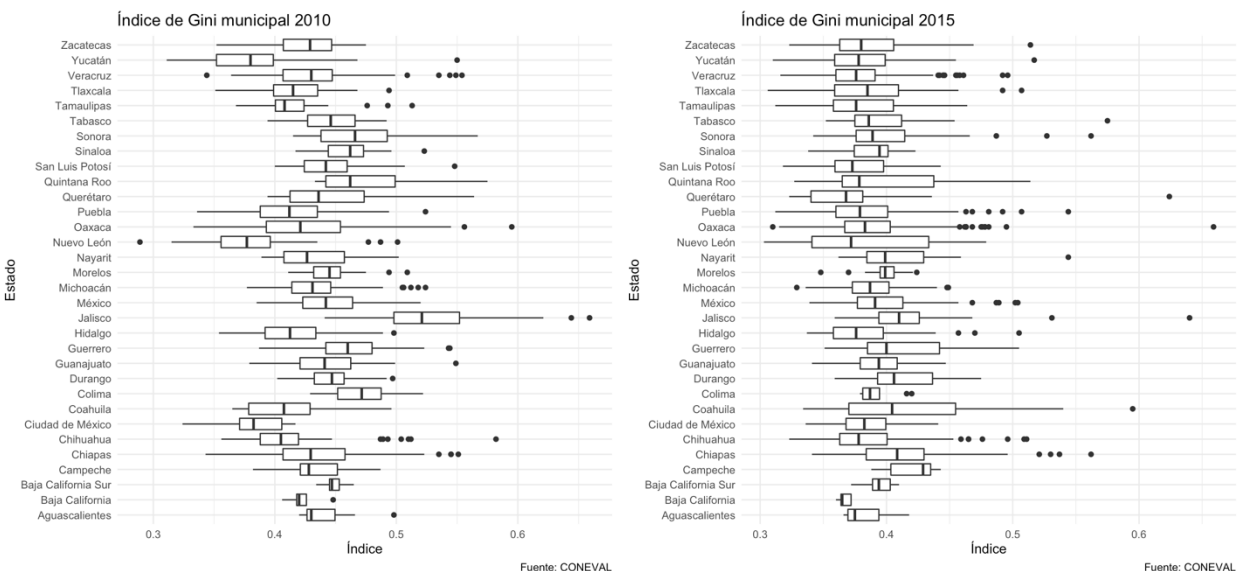
una variación mínima, es decir que la mitad de los municipios observados tienen una tasa menor a 1.26 y la mitad es mayor, para 2010, mientras que en 2015 la mediana es de 1.25 muertes por cada 100,000 habitantes. Los estados de Chihuahua, Nuevo León y Sinaloa son los estados con la mediana más alta durante 2010, para 2015 los estados con la media más alta fueron los estados de Chihuahua, Sinaloa y Guerrero.

Gráfica 6. Tasas de homicidios 2010 - 2015



Por su parte, la desigualdad medida por el coeficiente de Gini muestra una reducción de 2010 a 2015, tanto en la media como en la mediana, es decir hay una reducción en la desigualdad. En 2010 los estados con la media más alta de Gini fueron Jalisco, Colima y Sonora. Para 2015 la mediana más alta de Gini se encontró en los estados de Campeche, Chiapas y Jalisco.

Gráfica 7. Coeficiente de Gini 2010 - 2015



El Índice de Rezago Social, muestra que durante 2010 y 2015 los estados donde se concentran los municipios con mayor rezago son Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

De 2010 a 2015 hay reducciones en cuanto a medias y medianas en variables como porcentaje de hogares con jefatura femenina y población con ingreso inferior a la línea de bienestar; mientras que el porcentaje de población, divorciada, separada o viuda y la población desocupada aumentan en cuanto a media y mediana.

De acuerdo con el análisis de estadística descriptiva, es posible observar también que las tres variables relacionadas directamente con la estrategia de combate frontal al narcotráfico tienen grandes reducciones en la media y mediana, lo que implica un menor número de detenidos, armas incautadas y marihuana decomisada de 2010 a 2015. Una inferencia sobre esta reducción puede indicar que la reducción se debe a un menor número de operativos militares, ya que abarca dos administraciones distintas (Tabla 1).

3.2. Estrategia empírica.

La relación entre desigualdad y violencia, en principio podría ser explicada con la ecuación siguiente:

$$Y_{ij} = \beta_0_{ij} + \beta_1 X_{ij} + \beta_n C_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (1)$$

Donde Y representa a la violencia medida como tasa de homicidios con arma de fuego, X es la pendiente de la variable explicativa de desigualdad como el coeficiente de Gini a nivel municipal, β_0 es el intercepto, $\beta_n C$ representa a las variables de control, ϵ es el error estimado, i representa la unidad de análisis, los municipios y j el tiempo.

Al hacer las regresiones de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) de la ecuación 1 para los años 2010 y 2015, se puede observar que en 2010 desigualdad medida con Gini no era estadísticamente significativa para explicar el comportamiento de los homicidios; sin embargo, para 2015 esto cambia y Gini surge como una variable relevante o significativa para explicar el comportamiento de los homicidios (Tablas 2 y 3).

Al realizar las mismas regresiones, pero ahora con efectos de interacción entre el coeficiente de Gini y las tres variables relacionadas con el combate al narcotráfico, incautación de armas, detenidos en operativos militares y número de armas incautadas, es posible observar que el coeficiente de Gini por sí solo no es estadísticamente significativo para explicar el comportamiento de los homicidios. Sin embargo, para 2010 la interacción entre detenidos y decomiso de marihuana con Gini, sí tienen resultados significativos (Tabla 4), donde el efecto de interacción entre Gini y el número de detenidos tiene una relación negativa con la tasa de homicidios, y genera una reducción de 0.3 unidades en la tasa de homicidios con arma de fuego. Lo mismo sucede en 2015, la interacción de Gini con la variable de decomiso de marihuana resulta significativa (Tabla 5), la interacción entre Gini y el decomiso de marihuana genera un incremento de 0.002 unidades en la tasa de homicidios con arma de fuego.

Un problema en la ecuación 1 es que la relación entre desigualdad y violencia puede tener un problema de causalidad simultánea o de endogeneidad; es decir, que tanto la desigualdad puede ser explicada por la violencia, como la violencia ser explicada por la desigualdad.

El modelo *two-stages-least-squares* (2SLS) es de utilidad para en este caso porque ayuda a mitigar o aislar el efecto de endogeneidad entre desigualdad y violencia. Consiste en encontrar una variable instrumental que esté relacionada, tenga alta significancia y sea “fuerte” para explicar a la variable independiente, pero esta variable instrumental no debe estar directamente relacionada con la variable dependiente, es decir, la variable instrumental debe tener la virtud de explicar a la variable dependiente solo a través de la variable independiente.

Por lo tanto, la ecuación a utilizar es la siguiente:

$$Y_{ij} = \beta_0_{ij} + \beta_1(X * Z)_{ij} + \beta_n C_{ij} + \epsilon_{ij} \quad (2)$$

Donde Z representa a la variable instrumental. Para comprobar que el IRS efectivamente funciona como variable instrumental, debe cumplir con las condiciones de relevancia y de exogeneidad. Al realizar la prueba estadística, es posible observar que el IRS cumple con la condición de relevancia ya que está fuertemente correlacionada con Gini y es altamente significativa. La condición de exogeneidad ya que la construcción del índice se basa en variables de educación, servicios de salud, calidad y servicios de vivienda, el índice no constituye una medición de pobreza y no está relacionada con variables de violencia. Sin embargo, es una variable útil para explicar a la desigualdad, porque es un índice construido para la medición de la cohesión social y si bien no es una medición de desigualdad ni pobreza, es una variable que está estrechamente relacionada con ambas.

Al hacer las regresiones de variables instrumentales que estima el 2SLS, se obtienen los siguientes resultados: Primero, al hacer la regresión solamente con la variable instrumental para observar que, al mitigar el efecto endógeno entre desigualdad y violencia gracias al Índice de Rezago Social, en 2010 Gini no era una variable significativa para explicar la violencia, pero al

igual que en el OLS de la ecuación 1, en 2015 Gini surge como una variable estadísticamente significativa que explica el fenómeno de la violencia.

Lo que el modelo utilizando solamente la variable instrumental indica es que para 2015, ante un aumento unitario en Gini, hay un incremento de 42 unidades porcentuales en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (Tabla 6).

El mismo fenómeno puede observarse al agregar las variables de control, en principio, en 2010 únicamente las variables de control eran útiles para explicar el comportamiento de la violencia, las tres variables de control son estadísticamente significativas; pero al hacer la regresión para 2015, es posible observar que dos de las variables de control dejan de ser significativas y nuevamente, siendo consistente con lo observado anteriormente, el coeficiente de Gini surge como una variable estadísticamente significativa para explicar el comportamiento de la violencia. Además, hay que tomar en cuenta que para 2015 el número de detenidos, armas incautadas y la cantidad de marihuana decomisada redujo en comparación con 2010, esa es una posible razón por la cual las variables de control dejan de ser significativas.

Segundo, al analizar el efecto que tiene la desigualdad a través del coeficiente de Gini en el comportamiento de la tasa de homicidios con arma de fuego, haciendo uso de la variable instrumental y específicamente en el contexto del combate frontal al narcotráfico representado por las tres variables de control, el modelo 2SLS demuestra que para 2015, ante un incremento unitario en el coeficiente de Gini, es decir un aumento en la desigualdad, la tasa de homicidios tiene un incremento de 0.015 unidades porcentuales en la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes (Tabla 7).

Es importante reconocer que existen limitaciones en la información, para poder realizar un estudio longitudinal más amplio. En principio, existen críticas a la información generada en México respecto a homicidios ya que éstos no cumplen con los estándares internacionales establecidos en el protocolo de Bogotá (IEP, 2018) mediante el cuál se determina la calidad de los datos sobre homicidios. La información a nivel municipal reportada por INEGI es publicada anualmente y la última información disponible es al año 2018; mientras que la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se publica mensualmente tiene ciertas deficiencias que ya fueron expuestas.

Por otro lado, la información generada por el CONEVAL respecto al Índice de Desarrollo Humano, coeficiente de Gini y el porcentaje de personas con ingreso inferior a la línea de bienestar a nivel municipal solo es generado cada cinco años y la última información disponible es al año 2015, un análisis más completo y que pueda captar mejor esta relación entre violencia y desigualdad debería abarcar al año 2020.

Una limitación más es la poca información disponible sobre los operativos militares, número de personas detenidas, cantidad de drogas y armas incautadas. Hasta el momento solo el Programa de Política de Drogas del CIDE ha hecho un esfuerzo por recabar esa información, sin embargo, ante la negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional por hacer pública dicha información, ésta es muy limitada, pero sin duda, las variables relacionadas directamente al combate frontal al crimen son fundamentales para tener un entendimiento más completo.

IV. Hallazgos e implicaciones de política pública

La violencia se mantiene en una sociedad como la mexicana, que está económica y socialmente polarizada, donde se han debilitado los ya de por sí endebles vínculos comunitarios, minando la cohesión social. La desigualdad, la pobreza y las condiciones que privan a las personas de una vida digna han sido el combustible para alimenta a la violencia, en un contexto donde la violencia alimenta a la desigualdad y la desigualdad a la violencia.

Respecto al análisis econométrico, el hallazgo más relevante de la investigación es que las condiciones de violencia estructural en un contexto como el mexicano, de lucha frontal contra el crimen organizado, amplifica los efectos de la violencia, específicamente de los homicidios generados por esta estrategia, de modo que la violencia estructural es un determinante clave para entender el comportamiento de la violencia. A pesar de que entre 2010 y 2015 disminuye la desigualdad medida con el coeficiente de Gini y que en el mismo periodo también hay una disminución en la tasa de homicidios, la desigualdad está muy asociada con la violencia directa y específicamente los homicidios, que son la expresión más extrema de la violencia.

Un segundo hallazgo es que el Índice de Rezago Social, que aglomera a indicadores de educación, salud, calidad y servicios de vivienda, es siempre una variable significativa para explicar el comportamiento de la violencia en las regresiones lineales, y si bien, no es una un indicador que mida la pobreza, también resulta ser una variable útil para explicar a la desigualdad. Esto resulta relevante para el debate sobre la forma de medir la desigualdad, más allá de la visión economicista de medirla únicamente como distribución del ingreso con el coeficiente de Gini.

El tercer hallazgo es que de 2010 a 2015 hay una reducción en el número de detenidos en operativos militares, armas incautadas, y decomiso de marihuana, es decir una reducción en la estrategia de combate frontal al crimen. Es posible que esta reducción en la estrategia de combate frontal al crimen esté asociada a una reducción del número de homicidios, además de que las variables asociadas dejan de tener valor explicativo o significancia para explicar por completo el comportamiento de los homicidios en 2015.

Desde una perspectiva de políticas públicas, estos hallazgos refuerza la idea de que la política social es indisoluble de las políticas de prevención del delito, y a partir de los resultados de la

presente investigación es posible analizar la relevancia de los programas de prevención de la violencia como es el caso del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) que estuvo vigente entre los años 2013 y 2018, así como los programas prioritarios de la actual administración, que de acuerdo con su propia narrativa están enfocados para atender las causas de la inseguridad y la violencia desde sus raíces más profundas.

El PRONAPRED es un buen ejemplo de un programa que intentó atacar la violencia con una estrategia distinta al combate frontal al narcotráfico y a la delincuencia. El programa fue lanzado en 2013 como el programa insignia del gobierno federal para la prevención de la violencia y la delincuencia, de acuerdo con sus reglas de operación, el programa tenía los siguientes objetivos: Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía y actores sociales en la prevención social del delito, mediante su participación y desarrollo de competencias; reducir la vulnerabilidad ante la violencia y la delincuencia de las poblaciones de atención prioritaria; generar entornos que favorezcan la convivencia y seguridad ciudadana, y fortalecer las capacidades institucionales para la seguridad ciudadana en los gobiernos municipales, entidades federativas y federación.

Entre 2013 y 2016 el programa tuvo un presupuesto de 10 mil millones de pesos, pero fue desaparecido financieramente en 2017, mientras que para 2018 tuvo un presupuesto mínimo de 300 millones de pesos. Entre 2013 y 2016 fueron seleccionados 95 municipios para recibir fondos del programa, una de las deficiencias del programa fue que estos recursos se destinaron principalmente a la recuperación de espacios públicos y no en atender causas sociales más allá de la infraestructura, y diversos estudios (Merino, 2017) demuestran que el programa no tuvo efecto alguno sobre las tasas de homicidios en los municipios beneficiados, pues mantuvieron las mismas tendencias que los municipios que no pertenecían al programa.

A pesar de los pocos o nulos resultados del PRONAPRED para reducir las tasas de criminalidad, es importante continuar con programas federales que atiendan el fenómeno de la violencia desde una visión distinta y más integral que el mero uso de la fuerza militar o policiaca. En este sentido, la seguridad pública tiene más que ver con la construcción de lazos sociales fuertes, lucha contra la desigualdad y fortalecimiento de la cohesión social que con el uso de la fuerza pública.

V. Conclusiones

El problema público de violencia que vive México desde hace años debe ser comprendido en su dimensión más amplia. La violencia que surge en México, a partir de la implementación de una estrategia de combate frontal al narcotráfico, no se desarrolla en la nada, sino que existían condiciones previas, de fondo y estructurales que sumadas a esa estrategia permitieron que la violencia creciera y se desbordara. La ola de violencia no fue sorpresiva, la falta de oportunidades laborales, las crecientes brechas en las desigualdades, un rígido sistema de inmovilidad social, la degradación de las instituciones de impartición de justicia, la falta de rendición de cuentas, la concentración de la riqueza y la corrupción, fueron problemas que durante años no se corrigieron y que sirvieron y sirven como caldo de cultivo para amplificar la violencia en México.

El tema de la desigualdad en México importa porque a pesar de que entre 2010 y 2015 el coeficiente de Gini indica que la desigualdad se redujo, esto no se ha traducido en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población, sino al contrario, las brechas de desigualdad son cada vez mayores y el acceso a oportunidades es más complicado para los grupos que han sido sistemáticamente excluidos. Como ha sido comprobado en diversos estudios, la desigualdad tiene consecuencias graves a nivel individual y social, las sociedades más desiguales son las que mayores problemas sociales enfrentan: falta de crecimiento económico, problemas de salud, baja calidad educativa, precariedad laboral y violencia.

El análisis de la relación entre desigualdad y violencia en México, parte de los conceptos de violencia estructural y cohesión social, permite tener un entendimiento más amplio sobre esta relación mutua que se retroalimenta, no es casual que las regiones de América Latina sean al mismo tiempo las más violentas y las más desiguales en el mundo.

Atender la violencia en México requiere atender también a las desigualdades, mejorar las oportunidades de los sectores de la población más vulnerable, mitigar la exclusión de los más pobres y facilitar mecanismos de movilidad social, para que reducir las opciones de incorporarse al crimen, una visión integral también pasa por hacer efectiva la impartición de justicia, por disminuir la impunidad.

Bibliografía

- Anderson, T. (2015). ¿Por qué importa la desigualdad? Del economicismo a la integridad social. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*. 223, 191-208.
- Atkinson, A. (2016). *Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?* México: Fondo de Cultura Económica.
- Azaola, E. (2012). Entender la violencia. *Desacatos*. 40, 13-32.
- Azaola, E. (2012). La violencia de hoy, las violencias de siempre. *Desacatos*. 40.
- Barba, C. y Cohen N. (coords.) (2011). *Perspectivas críticas sobre la cohesión social: Desigualdad y tentativas fallidas de integración social en América Latina*: CLACSO.
- Berger-Schmitt, R. (2000). Social cohesion as an aspect of the quality of societies: concept and measurement. *EuReporting working papers*. 14.
- Bergman, M. (2012). La violencia en México, algunas aproximaciones académicas. *Desacatos*. 40.
- Cejudo, R. (2007). Capacidades y libertad. Una aproximación a la teoría de Amartya Sen. *Revista internacional de sociología*. LXV. 47.
- Cingano, F. (2014). Trends in income inequality and its impact on economic growth. *OECD Social, Employment and Migration Working Papers*. 163.
- CIDE (2018). *Estudio para elaborar una propuesta de Política Pública en materia de Justicia Transicional en México*. México: CIDE - CNDH.
- COLMEX (2018). *Desigualdades en México 2018*. México: El Colegio de México, Red de Estudios sobre Desigualdades.
- Durkheim, E. (1982). *La división del trabajo social*. Madrid: Akal Universitaria.
- Durkheim, E. (2011). *El suicidio*. México: Fontamara.
- Esquivel, G. (2015). *Desigualdad extrema en México. Concentración del poder económico y político*. México : Oxfam.

- Galindo, C., Frissard, P., Osorio, D. (2019). *Atlas de homicidios en México 2018*. México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD), diciembre.
- Galtung, J. (1969). *Violence, peace and peace research*. Oslo: International Peace Research Institute.
- Galtung, J. (1989). *Solving Conflicts: A Peace Research Perspective*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Galtung, J. (1990). Cultural Violence. *Journal of Peace Research*. 27, 291 – 305.
- Galtung, J. (1998). *Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia*. Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- Galtung, J. (2003). *Paz por medios pacíficos. Paz y conflicto, desarrollo y civilización*. Bilbao: Gernika Gogoratuz.
- Gómez y Merino (2012). ‘Ninis’ y violencia en México: ¿nada mejor que hacer o nada mejor que esperar? En José Antonio Aguilar (coord.), *Las Bases Sociales del Crimen Organizado y la Violencia en México*. (pp. 133 - 181) México: Secretaría de Seguridad Pública.
- Han, B.C. (2016). *Topología de la violencia*. Barcelona: Herder editorial.
- IEP (2018). *Índice de datos sobre homicidios Resultados 2018 ¿cómo registramos los homicidios en México?* México: Institute for Economics and Peace.
- López-Calva, L.; Enamorado, T.; Rodríguez-Castelán, C. y Winkler, H. (2014). *Income inequality and violent crime. Evidence from Mexico's drug war*. Policy Research Working Paper no. 6395, The World Bank, June.
- Marshall, T. (2005). *Ciudadanía y clase social*. 1a Edición, Buenos Aires: Editorial Losada.
- Merino, J. (2017). Dinero gastado en PRONAPRED: 10 mil millones de pesos. Relación con cambio en violencia: nulo. *Revista Nexos*, febrero.
- Merton, R. (1938). Social structure and anomie. *American sociological review*. 3.

- Nadanovsky, P; and J. Cunha-Cruz. (2009). The relative contribution of income inequality and imprisonment to the variation in homicide rates among developed (OECD), South and Central American countries. *Social Science & Medicine*. 69, 1343 – 1350.
- Organización Mundial de la Salud, OMS (2002). *Informe Mundial sobre la violencia y la salud*. Ginebra, Suiza.
- Osorio, J. (2012). Las causas estructurales de la violencia. Evaluación de algunas hipótesis. En José Antonio Aguilar (coord.), *Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México*. (pp. 73 - 117) México: Secretaría de Seguridad Pública.
- Oxfam (2016). *Una economía al servicio del 1%. Acabar con los privilegios y la concentración de poder para frenar la desigualdad extrema*. Oxfam Internacional, enero.
- Oxfam (2018). *México Justo: Propuestas de política pública para combatir la desigualdad*. Ciudad de México, enero.
- Özler, B. (2005). Crime and local inequality in South Africa, *Journal of Development Economics*. 76, 265 – 292.
- Poveda, A. (2011). Economic Development, Inequality and Poverty: An Analysis of Urban Violence in Colombia, *Oxford Development Studies*. 39, 453 – 468.
- Sen, A. (1998). The Concept of Development. *Handbook of Development Economics*. Volume 1, Edited by H. Chenery and T.N. Srinivasan, Elsevier Science Publishers.
- Vilalta, C. (2012). Los delitos contra la salud en México 1997 – 2011, En José Antonio Aguilar (coord.), *Las bases sociales del crimen organizado y la violencia en México*. (pp. 35 - 61) México: Secretaría de Seguridad Pública.
- Zepeda, R. (2018). *Violencia en tierra caliente: desigualdad, desarrollo y escolaridad en la guerra contra el narcotráfico*. Instituto Belisario Domínguez, FES Acatlán-UNAM.

Referencias a bases de datos.

Tasa de homicidios dolosos, tomado de las estadísticas de mortalidad de INEGI.

<https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp>

Índice de Rezago Social, CONEVAL.

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Que-es-el-indice-de-rezago-social.aspx#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Rezago%20Social%20es%20una%20medida%20ponderada%20que,observaci%C3%B3n%20seg%C3%BAAn%20sus%20carencias%20sociales.>

Ingreso inferior a la línea de bienestar, CONEVAL.

<https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Pobreza-2018.aspx>

Encuestas intercensales, INEGI.

<https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2010/>

<https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/>

Coefficiente de Gini.

https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/Cohesion_Social.aspx#:~:text=Para%20medir%20el%20grado%20de,los%20ingresos%20entre%20la%20poblaci%C3%B3n.

Base de datos del Programa de Política de Drogas del CIDE.

<http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/observatorio/grafica/id/69.html>

Anexos.

Tabla 1. Estadística descriptiva.

	min		max		mediana		media		Desv. Est.	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015	2010	2015
Homicidios	0	0	279	251	1.26	1.25	10.5	7.86	26.5	19
Gini	0.289	0.303	0.659	0.659	0.429	0.386	0.432	0.391	0.0436	0.0359
IRS	-1.89	-1.69	4.44	5.12	-0.133	-0.208	0.00143	0.00121	1	1
Jefatura femenina	5.47	2.92	49.6	28.8	22.2	13.6	22.2	13.3	5.32	3.6
Población divorciada	2.03	0	19.9	23.8	6.74	9.8	6.9	9.95	1.83	2.34
Ingreso inferior al bienestar	4.15	3.29	99.4	99.9	71.9	71.1	70.2	69.3	18.1	19
Desocupación	0	0	51.9	23.8	3.74	9.8	4.55	9.95	3.99	2.43
Detenidos	5	4	850	1144	333	123	307	165	232	187
Armas incautadas	7	1	4752	2145	452	48	795	157	1080	302
Decomiso de marihuana	0	1.49	413941	81721	16754	2245	42144	10338	87028	19293

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 2. Estimadores OLS para datos 2010

Datos 2010			
	Homicidios arma 2010		
<i>Predictors</i>	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	43.40	18.83 – 67.98	0.001
Gini.2010	-24.02	-58.29 – 10.25	0.169
IRS.2010	6.70	4.38 – 9.02	<0.001
Desocupación.2010	0.43	0.03 – 0.82	0.035
Ingreso.inferior.bienestar.2010	-0.46	-0.59 – -0.33	<0.001
Jefatura.femenina.2010	-0.18	-0.47 – 0.10	0.210
Embarazo.adolescente.2010	0.18	-0.81 – 1.17	0.724
Detenidos.2010	0.02	0.01 – 0.03	<0.001
Armas.incautadas.2010	-0.00	-0.00 – -0.00	0.024
Decomiso.Marihuana.2010	0.00	0.00 – 0.00	<0.001
Observations	1292		
R ² / R ² adjusted	0.297 / 0.292		

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 3. Estimadores OLS para datos 2015

Datos 2015			
	Homicidios arma 2015		
<i>Predictors</i>	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	-37.17	-55.76 – -18.58	<0.001
Gini.2015	59.53	33.18 – 85.88	<0.001
IRS.2015	3.94	2.30 – 5.58	<0.001
Desocupación.2015	0.95	0.39 – 1.51	0.001
Ingreso.inferior.bienestar.2015	-0.05	-0.14 – 0.04	0.259
Jefatura.femenina.2015	-0.16	-0.49 – 0.17	0.338
Embarazo.adolescente.2015	0.84	-0.03 – 1.70	0.058
Detenidos.2014	0.00	-0.01 – 0.01	0.819
Armas.incautadas.2014	-0.01	-0.01 – 0.00	0.092
Decomiso.Marihuana.2014	0.00	0.00 – 0.00	<0.001
Observations	1504		
R ² / R ² adjusted	0.137 / 0.132		

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 4. Estimadores OLS para datos 2010 con efectos de interacción

Datos 2010 con interacciones			
	Homicidios arma 2010		
<i>Predictors</i>	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	-1.99	-35.39 – 31.41	0.907
Gini.2010	21.69	-30.08 – 73.46	0.411
Detenidos.2010	0.15	0.09 – 0.21	<0.001
Decomiso.Marihuana.2010	-0.00	-0.00 – 0.00	0.059
Armas.incautadas.2010	-0.01	-0.03 – 0.00	0.057
IRS.2010	6.65	4.32 – 8.98	<0.001
Desocupación.2010	0.36	-0.04 – 0.75	0.076
Ingreso.inferior.bienestar.2010	-0.45	-0.59 – -0.32	<0.001
Jefatura.femenina.2010	-0.13	-0.41 – 0.16	0.389
Embarazo.adolescente.2015	1.57	0.39 – 2.74	0.009
Gini.2010 * Detenidos.2010	-0.30	-0.44 – -0.17	<0.001
Gini.2010 * Decomiso.Marihuana.2010	0.00	0.00 – 0.00	0.005
Gini.2010 * Armas.incautadas.2010	0.03	-0.00 – 0.06	0.085
Observations	1292		
R ² / R ² adjusted	0.311 / 0.304		

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 5. Estimadores OLS para datos 2015 con efectos de interacción

Datos 2015 con interacciones

Homicidios arma 2015			
<i>Predictors</i>	<i>Estimates</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercept)	-30.71	-54.07 – -7.36	0.010
Gini.2015	38.91	-7.66 – 85.48	0.101
Detenidos.2014	0.00	-0.13 – 0.13	0.955
Decomiso.Marihuana.2014	-0.00	-0.00 – -0.00	0.014
Armas.incautadas.2014	0.02	-0.06 – 0.10	0.676
IRS.2015	3.55	1.90 – 5.20	<0.001
Desocupación.2015	0.92	0.36 – 1.48	0.001
Ingreso.inferior.bienestar.2015	-0.04	-0.13 – 0.05	0.373
Jefatura.femenina.2015	-0.16	-0.49 – 0.17	0.341
Embarazo.adolescente.2015	0.90	0.03 – 1.76	0.042
Gini.2015 * Detenidos.2014	-0.01	-0.33 – 0.32	0.971
Gini.2015 * Decomiso.Marihuana.2014	0.00	0.00 – 0.00	0.001
Gini.2015 * Armas.incautadas.2014	-0.06	-0.27 – 0.15	0.569
Observations	1504		
R ² / R ² adjusted	0.145 / 0.138		

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 6. Estimadores 2SLS con variable instrumental

Instrumental		
<i>Dependent variable:</i>		
	Instrumental	
	(1)	(2)
Gini	42.866 (107.003)	273.671*** (80.067)
Constant	29.545 (46.144)	-99.482*** (31.599)
Observations	1,292	1,505
R ²	0.0004	0.113
Adjusted R ²	-0.0004	0.114
Residual Std. Error	27.228 (df = 1290)	21.089 (df = 1503)
<i>Note:</i>	* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01	

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.

Tabla 7. Estimadores 2SLS con variable instrumental y variables de control

VARIABLES DE CONTROL		
<i>Dependent variable:</i>		
Regresiones		
	(1)	(2)
Intercepto	7.923 (96.201)	291.868*** (81.744)
Gini	0.001 (0.001)	0.015*** (0.004)
Armas incautadas	0.042*** (0.003)	-0.015** (0.006)
Detenidos	-4.705 (41.405)	-106.584*** (32.155)
Observations	1,292	1,505
R ²	0.180	0.116
Adjusted R ²	0.178	0.118
Residual Std. Error	24.682 (df = 1288)	21.133 (df = 1501)
<i>Note:</i>	* p<0.1; ** p<0.05; *** p<0.01	

Fuente: Estimaciones propias con base en datos recabados de CONEVAL, encuestas intercensales 2010 y 2015 y del Programa de Políticas de Drogas del CIDE.